

Santiago, diez de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos cuarto, quinto y sexto, que se suprimen.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que, en virtud de nuevos antecedentes, la defensa del amparado Luis Alberto Rojas González, solicitó en la causa Rit 483-2020, ante el 10° Juzgado de Garantía, se fijara una audiencia con el objeto de discutir el reconocimiento de abonos provenientes de la causa Rit 121-2014 del mismo tribunal, petición que fue desestimada por considerar que dicha solicitud ya había sido resuelta con fecha 10 de noviembre del año pasado, encontrándose ejecutoriada y que además fue objeto de un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones, que también fue rechazado.

Segundo: Que, según consta de las referencias incorporadas al recurso, en la causa RIT 121-2014, del 10° Juzgado de Garantía de Santiago, el amparado permaneció en prisión preventiva 124 días, causa que a diferencia de la original petición que fue considerada por la Sra. Juez a quo, culminó con el sobreseimiento definitivo por prescripción de la acción penal, por resolución dictada el 1 de abril pasado, de manera que al no concurrir los presupuestos de la cosa juzgada, por tratarse de una diversa causa de pedir, resultaba procedente debatir aquella solicitud.

Tercero: Que, atendida la naturaleza cautelar de la libertad personal y la seguridad individual, al hacerse lugar al recurso de amparo procede decidir de manera inmediata sobre el fondo de la acción deducida.

Cuarto: Que el objetivo global de la Reforma Procesal Penal comprende una maximización de las garantías en materia de derechos fundamentales frente



al ius puniendi estatal, con especial énfasis en diversos principios, como el in dubio pro reo. Que, en tal contexto, y como una primera aproximación, aparece de toda justicia considerar a favor del sentenciado el tiempo anterior de privación de libertad -como lo es, sin duda, el que estuvo sometido a la medida cautelar de prisión preventiva- para abonarlo al cumplimiento de la pena actual.

Quinto: Que, cabe hacer referencia a los artículos 26 del Código Penal, 348 del Código Procesal Penal y 164 del Código Orgánico de Tribunales, los cuales inciden en el problema planteado, cual es, si cabe dar lugar al abono pedido tratándose de causas diferentes que no pudieron tramitarse acumuladas, lo que ha sido denominado abono heterogéneo y, de la sola lectura de las normas transcritas, aparece que si bien ellas no autorizan expresamente los abonos de tiempos de privación de libertad anteriores, tampoco los prohíben.

Sexto: Que, en las condiciones dichas, es indudable que la legislación vigente deja sin resolver expresamente el problema del abono de los tiempos que reúnan las características del solicitado en estos autos; esto es, de un período de prisión preventiva correspondiente a un proceso anterior, que culminó con sobreseimiento definitivo, al segundo proceso, en que cumple actualmente una condena privativa de libertad.

Séptimo: Que entendiendo que el pronunciamiento que acá se emite afecta sólo al presente caso, cuyo contenido se trata de solucionar, estima esta Corte que corresponde acoger lo solicitado por el recurrente, conforme, entre otros, a los siguientes razonamientos que se orientan en esa dirección.

a) La normativa procesal penal —tanto el Código Procesal Penal como la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente—, acorde con la constitucional y de derecho internacional, prefiere claramente medidas cautelares personales menos gravosas que la privación de libertad transitoria —prisión preventiva o internación



provisoria—, lo cual supone reconocer el valor superior de la libertad y el carácter ofensivo para el derecho a ella que importa su privación.

b) Si la privación temporal de la libertad resulta injustificada, como en la causa en que el afectado estuvo en prisión preventiva y luego fue dictado sobreseimiento definitivo, no puede exigírsele que simplemente se conforme con esa injusticia que derivó de un exceso en el ejercicio del ius puniendi del Estado; en especial si después de ello y dentro de los plazos de prescripción, debe cumplir una condena privativa de libertad.

c) No parece suficiente ni lógico que, para reparar esa injusticia, el afectado sólo tenga como vía de solución intentar obtener —a su costa— la declaración señalada en el artículo 19 N°7, letra i) de la carta política, y emprender posteriormente la tramitación de un juicio sumario que pueda entregarle una indemnización, luego de bastante tiempo.

d) Las normas penales deben ser interpretadas restrictivamente sólo en el caso de afectar derechos fundamentales de los imputados, pero no cuando ellas dicen relación con los efectos libertarios de cualquier apremio o restricción a su libertad, como ocurre con el abono pedido por el amparado, conforme a las características ya descritas; lo que está en concordancia con la garantía que reconoce el artículo 19, N°7 de la Constitución y con la norma del artículo 5° del Código Procesal Penal que dispone: “Legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad. No se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación o restricción de libertad a ninguna persona, sino en los casos y en la forma señalados por la Constitución y las leyes. Las disposiciones de este Código que autorizan la restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus



facultades serán interpretadas restrictivamente y no se podrán aplicar por analogía.”

Octavo: Qué, en consecuencia, al decidirse –en su oportunidad- por la juez recurrido que en la especie no procede la imputación de abonos en causa diversa, por no concurrir el requisito de tramitación conjunta contemplado en el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales y el artículo 348 del Código Procesal Penal, ha incurrido en una ilegalidad, puesto que incorporó al precepto requisitos que no contempla y que no es posible aceptar, sin vulnerar el principio rector de interpretación restrictiva de la ley procesal penal, en cuanto afecta derechos constitucionales del penado, con incidencia tanto en lo procesal como en la interpretación de la ley; entre cuyos criterios está el que afirma que en caso de duda se resuelve a favor del acusado, o en caso de duda se resuelve en el sentido favorable al imputado (Sergio Politoff, Derecho Penal, Tomo I, pág. 133).

Noveno: Que, tal como ha sostenido esta Corte, por ello, debe el juzgador cumplir su obligación ineludible de decidir la cuestión planteada recurriendo a los principios generales del derecho y al sentido general de la legislación nacional e internacional aludidos en los considerandos que anteceden, lo cuales llevan a afirmar que en las circunstancias ya descritas, procede la imputación de abonos en causa diversa (SCS N° 63302 de 5 de junio de 2020 y N° 22075-21 de 30 de marzo de 2021).

Por estar consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **se revoca** la sentencia apelada de veintiocho de abril pasado, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en el Ingreso Corte N° 237-21 y en su lugar **se acoge** el recurso de amparo interpuesto a favor de Luis Rojas Gonzalez debiendo la señor a juez a quo arbitrar



medidas a fin de reconocer en su favor el tiempo que estuvo privado de libertad en la causa del RIT 121-2014 del 10° Juzgado de Garantía de Santiago.

Acordada con el voto en contra de los Abogados Integrantes Sr. Abuaud y Sra. Coppo quienes estuvieron por confirmar el fallo en alzada, en virtud de sus propios fundamentos.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 31.045-2021.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., y los Abogados Integrantes Sr. Ricardo Abuaud D., y Sra. Carolina Coppo D. No firman los Abogados Integrantes Sr. Abuaud y Sra. Coppo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausentes.



JZXXMXZGX

En Santiago, a diez de mayo de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

